

e estudios/Working Papers

(WP-2013-27)

Título

**La Protesta Social en Chile (2006-2011):
conflicto social y repertorios de acción en
torno a los movimientos estudiantil,
mapuche y ambiental**

Autor(es):

Cargo/Adscripción:

Fernández Labbé, Juan

*Investigador adjunto Rimisp– Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural*



Recibido: 02/04/2013

Aceptado: 15/04/2013

Publicado: 01/05/2013



Creative Commons License 3.0 (España) Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas.

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento - Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). No comercial - No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin obras derivadas - No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Más información en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>



La Protesta Social en Chile (2006-2011): conflicto social y repertorios de acción en torno a los movimientos estudiantil, mapuche y ambiental

Fernández Labbé, Juan

Resumen/Abstract:

El presente trabajo caracteriza la protesta social en Chile entre los años 2006-2011. Tras un registro y revisión de las acciones de protesta acontecidas en torno al conflicto estudiantil, mapuche y ambiental, se analiza su alcance e intensidad (número de días y número de acciones de protesta), el repertorio de acción desplegado en torno a cada eje de conflicto y su localización geográfica, apuntando algunos elementos de continuidad y ruptura en el tiempo, así como diferencias y semejanzas entre los movimientos impulsores de la protesta. Finalmente, se delimitan algunas áreas de análisis a desarrollar en el marco de un programa de investigación en curso. ABSTRACT: This paper characterizes the social protest in Chile between the years 2006-2011. After reviewing the protest actions that occurred within the student conflict, the mapuche conflict and the environmental conflict, it analyzes the scope and intensity of social protest (number of days and number of protest actions), the repertoire of actions deployed around each conflict issue and its geographical location, identifying certain elements of continuity and change over time, as well as differences and similarities between the movements promoting the protest. Finally, we outline some areas of analysis to be developed in the framework of an ongoing research program.

Palabras clave/Keywords:

Protesta social, repertorios de acción, movimiento estudiantil, movimiento mapuche, movimiento ambiental, Chile.

Extracto curricular/Author Information:

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en Metodología de la Investigación en C. Sociales y Doctorando en Sociología, Universidad Complutense de Madrid/Universidad del País Vasco. Áreas principales de investigación: políticas públicas (diseño, implementación y evaluación), descentralización, desarrollo territorial, movimientos sociales y la acción colectiva.

Email: jfernani@uc.cl

La Protesta Social en Chile (2006-2011): conflicto social y repertorios de acción en torno a los movimientos estudiantil, mapuche y ambiental

Fernández Labbé, Juan

El presente artículo forma parte de una investigación más amplia que tiene por objetivo caracterizar la protesta social en Chile en el período 2006-2011 y analizar sus impactos políticos. Este documento aborda la primera parte de dicho objetivo.

1. Introducción

El día 3 de enero de 2011, grupos de manifestantes se congregaron en las principales calles de Santiago, Temuco, Valparaíso y Puerto Montt para conmemorar los tres años de la muerte de Matías Catrileo, joven activista de la causa mapuche muerto tras ser baleado por un agente de Fuerzas Especiales de Carabineros, mientras participaba en la toma de un fundo. Quienes protestan recuerdan la fecha con una velación y una rogativa, a la vez que rechazan la impunidad del homicidio y reclaman justicia –el autor material del disparo, tras ser identificado, fue trasladado a otra ciudad del sur de Chile, manteniendo sus funciones. La protesta se repetiría al día siguiente y en sucesivas ocasiones durante el año. Poco más de dos meses después, cuatro comuneros mapuche pertenecientes a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) detenidos bajo la Ley Antiterrorista, inician una huelga de hambre que se extenderá por 86 días reclamando un juicio justo. Dos meses más tarde, un grupo de encapuchados ingresa a dos predios de un agricultor en Ercilla, disparando, quemando una garita de seguridad y quitando 800 metros de cercos, reivindicando la propiedad ancestral de dichas tierras. Esta dinámica caracteriza la conflictiva relación socio-política de los últimos años en la región de la Araucanía.

En otro ámbito, el 16 de febrero del mismo año unas 200 personas se manifiestan en las calles de Santiago en contra de la realización del proyecto termoeléctrico Central Castilla –región de Atacama-, y lo propio ocurre en Punta Arenas –región de Magallanes- en relación al Proyecto minero Isla Riesco. Menos de 20 días después, 3 mil manifestantes en Atacama cortan la Ruta 5 Sur demandando que se desista de la construcción de la central. Dos meses más tarde, grupos de manifestantes en distintas ciudades a lo largo del país se echan a la calle para protestar contra la aprobación del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. A lo largo del año, diversos proyectos serán contestados por la población con movilizaciones y actos de denuncia

sobre la depredación ambiental y las consecuencias negativas para las comunidades cercanas a los proyectos.

Un tercer campo de protesta social –el de mayor notoriedad y que definirá al año 2011 como un año de movilización social- es el protagonizado por los estudiantes universitarios y secundarios. En abril, los estudiantes de una universidad privada se movilizan rechazando el que su casa de estudios sea vendida a un fondo de inversiones. Ese mismo mes, los estudiantes de centros públicos se manifiestan ante el retraso en la entrega de las becas y de la Tarjeta Nacional Estudiantil de transporte. Un mes después se producirá un Paro Nacional, con manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país, demandando la recuperación de la educación pública. Al mes siguiente, las marchas convocadas por los estudiantes congregarán a más de 200 mil personas en todo el país, cifra que alcanzará su cénit en el mes de agosto, con un millón de personas concentradas –sólo en la capital- demandando educación pública, gratuita y de calidad.

A estos tres campos de conflicto social se sumaron protestas esporádicas de trabajadores, funcionarios públicos, mineros, usuarios del transporte urbano, pobladores y vecinos, entre otros, que colmaron el año 2011 de expresiones de acción colectiva de diverso tenor, naturaleza y alcance.

La protesta social del año 2011 se reveló como una expresión colectiva ciudadana reiterada, masiva y demostrativa de un sistema político que cada vez respondía menos en su estructura formal-institucional a las demandas de la población. La sociedad no se había visto interpelada tan fuertemente por la acción colectiva desde el año 2006, en que los estudiantes secundarios se habían manifestado masivamente y habían ocupado sus establecimientos educacionales para demandar cambios en el sistema educativo.

De acuerdo a estudios ya clásicos sobre los movimientos sociales, al momento de hacerse visible un movimiento social, su germen ya estaba presente con anterioridad y sus características ya estaban en gran parte definidas en las redes subterráneas (Melucci, 1998). De hecho, cuando la acción colectiva es desplegada por las organizaciones, lo es tras un tráfico previo en grupos, redes y canales informales de gente que se interrelaciona (Tejerina, 2010; della Porta y Diani, 2011). Al observar la explosión de las movilizaciones sociales en el año 2011, se la debe mirar como un proceso que venía gestándose hace tiempo en el campo social, con secuencias de períodos de latencia y de visibilidad (Melucci, 1996). Estos últimos son indicativos de aquello que ocurre en el interior del cuerpo social y su seguimiento permite aproximarse al itinerario realizado en los ejes del conflicto social.

¿Qué características ha tenido la protesta social en Chile entre los años 2006 y 2011? ¿Cuál ha sido su intensidad y alcance? ¿Qué repertorio de acciones han desplegado los colectivos sociales? ¿Qué extensión/concentración geográfica ha tenido? ¿Qué elementos de continuidad y ruptura se observan? ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre los principales grupos sociales impulsores de la protesta?

El presente trabajo busca dar respuesta a estas interrogantes, tras el análisis de las expresiones de protesta social acontecidas en torno al conflicto estudiantil, mapuche y

ambiental entre los años 2006 y 2011, junto con delinear algunas áreas de análisis para un programa de investigación en curso.

2. Descripción sinóptica de los movimientos estudiantil, mapuche y ambiental

En el último lustro, los tres ejes de conflicto señalados han cobrado notoriedad en el espacio público, con orígenes y trayectorias dispares en cuanto a temporalidad y contenido, pero con contextos y adversarios comunes que los han hecho coincidir muchas veces en las calles.

a) *El movimiento estudiantil por la educación pública y el fin del lucro*

Las movilizaciones estudiantiles del período 2006-2011 tienen como antecedente histórico una larga trayectoria de jornadas de protesta y demandas a lo largo de casi un siglo. El movimiento por la Reforma Universitaria de 1918 marcaría el inicio de una irregular ola de movimientos estudiantiles que tendría su segundo gran acontecimiento en 1967, sin embargo, en la última década del siglo XX, tras la recuperación de la democracia, se aprecia un nuevo impulso que irá acumulando energías hasta tener su punto máximo en el año 2011¹.

El año 2006, la revolución *pingüina* constituirá un hito en materia de movilizaciones estudiantiles, con una masiva convocatoria a nivel nacional, la ocupación de establecimientos y una inclusión en la agenda pública que derivaría en la conformación de una comisión presidencial destinada a proponer medidas en materia educativa².

Las principales demandas de ese año eran la derogación de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza); el fin de la municipalización de la enseñanza; estudio y reformulación de la JEC (Jornada Escolar Completa); gratuidad de la PSU (Prueba de Selección Universitaria); pase escolar gratuito y unificado y tarifa escolar gratuita en el transporte escolar para la Educación Media³.

¹ En los últimos años, el sistema educativo chileno ha logrado la triste particularidad de ser el más caro del mundo - el costo promedio anual de la educación superior asciende a los US\$ 3.400, representando un 23% del PIB per cápita nacional- (Mayol, 2011), la que más recursos de las personas se lleva -el 85% del valor es aportado por las familias, cubriendo sólo un 15% el Estado- (OCDE, 2011b) y la más segregada (Valenzuela et al, 2009; Bellei, 2009; Mizala y Torche, 2010). Esa figura resulta de la creación de un mercado de la educación, a partir de un conjunto de medidas implementadas desde 1981 en adelante, tendientes a debilitar a la oferta pública y potenciar a los centros privados, tanto en el nivel de enseñanza obligatoria, como universitaria, tales como la LOCE; la municipalización de la educación obligatoria; la creación de un subsidio a la demanda -*voucher*- y el fomento de los centros particulares-subvencionados; la fragmentación de las universidades públicas; el fomento a la creación de universidades privadas; la reducción de los aportes basales a los centros públicos y del aporte fiscal directo, y la canalización de los recursos a través del aporte fiscal indirecto (AFI).

² Para un análisis de dicho proceso, ver Garretón, M. *et al* (2011).

³ La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) fue establecida en el período de la Dictadura Militar, sin ser modificada por los gobiernos democráticos hasta 20 años después del retorno a la democracia, precisamente a causa del movimiento "pingüino" del 2006. La reemplazó la Ley General de Educación (LGE), promulgada el año 2009, con un contenido que distaba mucho de los planteamientos elaborados por el movimiento estudiantil, por lo que no era de extrañar que en 2011 fuera nuevamente uno de los ejes de las demandas estudiantiles. Por su parte, la gratuidad del pase escolar es una demanda que cobra fuerza a inicios del 2000, pero que apunta a una situación

El 2008, tras la respuesta de las autoridades y la discusión legislativa de la LGE (Ley General de Educación) que vendría a reemplazar a la LOCE, los secundarios se echaron a la calle para rechazar el proyecto, que en lo sustancial no incorporaba las demandas principales del movimiento. Junto con ello, los universitarios denunciaban la crisis de la educación superior ante la quiebra de dos universidades del CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) y el cierre de una universidad privada, a lo que se sumaba el reclamo por el desconocimiento de la Tarjeta Nacional Estudiantil de transporte por el gremio de autobuseros de Valparaíso.

En 2011, las primeras expresiones de descontento tuvieron lugar en abril y fueron protagonizadas por estudiantes universitarios de la Universidad Central (privada), ante la noticia de venta del 50% de la propiedad de la universidad a un fondo de inversión. Ese mismo mes, los estudiantes de entidades públicas se manifestaron ante el retraso en la entrega de las becas y de la Tarjeta Nacional Estudiantil de transporte, responsabilidad de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).

La movilización estudiantil se presentó como una respuesta ante el proceso de mercantilización de la educación⁴, estableciendo como demandas fundamentales el fortalecimiento y gratuidad de la educación pública, el fin al lucro en la educación, y la democratización de las entidades educativas; teniendo como principales actores a los estudiantes universitarios (organizados a través de la CONFECH) y secundarios (aglutinados en la ACES y la CONES), sumados los docentes (el Colegio de Profesores) y, de forma indirecta, un conjunto de otros colectivos sociales (sindicatos, funcionarios públicos, mineros, etc.).

b) El conflicto mapuche o la autodeterminación contra la desposesión

Si bien el conflicto mapuche obedece a un proceso histórico que data desde la victoria chilena y anexión del territorio ancestral por parte del Estado de Chile en 1883, se denomina así usualmente a los enfrentamientos que han tenido lugar en la región de la Araucanía desde la década de 1990 a la fecha, entre comunidades mapuche por un lado, y empresas forestales propiedad de grandes grupos económicos, agricultores, la policía y la institucionalidad estatal por otro. El núcleo de la disputa radica en la propiedad de las tierras de la zona, ancestralmente en manos de las comunidades indígenas, históricamente enfrentadas a un proceso de desposesión⁵.

histórica; ya en 1957 se producían protestas estudiantiles por el alza en la tarifa de transporte (Salazar, 2012). Para una revisión del movimiento estudiantil secundario, ver, entre otros, OPECH (2009a; 2009b); Garretón, M. (2011).

⁴ Para ver en detalle el despliegue de la educación como un mercado, ver Mönckeberg (2007).

⁵ El pueblo mapuche se caracteriza por tener una historia tan épica como sufrida. Durante 300 años resistió la invasión de los conquistadores españoles, siendo el único pueblo originario de América que no fue doblegado por los europeos (Bengoa, 2000). Sin embargo, tras la independencia de Chile la historia cambiaría, siendo finalmente reducido por el Estado chileno y acosado sucesivamente por la élites nacionales. Los últimos 200 años han sufrido procesos de desposesión acentuados que han empujado hasta el límite su supervivencia como pueblo, cultura y nación (Pineda, 2012; Pairicán y Álvarez, 2011; Tricot, 2009; Bengoa, 1996; 2000; 2003; Pinto, 2000; Foerster, 2006; Bello, 2004). Todo ello, frente a una sociedad chilena que siempre se ha mantenido al margen, objeto de un histórico discurso racista que ha infravalorado y puesto al pueblo mapuche como separado de los chilenos (Waldman, 2012), propiciado además por la escasa proporción de la población que se autoidentifica como perteneciente a la etnia mapuche (sólo el 4% de la población nacional, de acuerdo al CENSO de 2002).

Al igual que otros pueblos originarios de Latinoamérica, la población mapuche presenta índices de pobreza mayores que el resto de los habitantes del territorio nacional, con una prevalencia 5 puntos porcentuales mayor que la

Tras la recuperación de la democracia, desde el Estado se han planteado diversos compromisos tendientes hacia un mayor reconocimiento del pueblo mapuche y una mayor participación de sus representantes en la institucionalidad, sin embargo, los avances concretos han sido muy limitados, evidenciándose una permanente reticencia en el Congreso Nacional a aprobar proyectos de ley favorables al pueblo mapuche (Fortin y Pairicán, 2010)⁶. Esta falta de respuesta por parte de la institucionalidad chilena a las demandas de las comunidades mapuche, habría impulsado un cambio de eje en el movimiento mapuche, pasando de la reivindicación de sus demandas dirigida a las autoridades chilenas, a la politización de sus organizaciones tendiente hacia un reclamo por autonomía, autodeterminación y liberación nacional (Fortin y Pairican, 2010).

Organizaciones clave en el proceso han sido el Consejo de Todas las Tierras, durante la década de los '90, y posteriormente Identidad Territorial Lafkenche, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco y la Alianza Territorial Mapuche. Las dos primeras contribuyeron a que la movilización mapuche tuviese un proceso de ascenso y auge entre 1997 y 2003, momento en el cual se forjó una nueva fase de enfrentamiento, caracterizada por su carácter radical, la elaboración de un discurso reivindicativo y una estrategia de acción violenta (Pineda, 2012). De ahí en adelante, la dinámica contenciosa ha ido desplegándose en forma reiterativa hasta la fecha, teniendo como respuesta por parte del Estado la aplicación de un enfoque centrado en la seguridad (ley de seguridad interior del Estado, ley antiterrorista) y la criminalización de la acción indígena⁷.

c) El conflicto socio-ambiental o las comunidades contra la depredación

En las últimas décadas, se han venido sucediendo conflictos ambientales a lo largo del territorio nacional, fundamentalmente asociados a proyectos mineros (Pascua Lama, Pelambres, Isla Riesco), hidroeléctricos o termoeléctricos (Ralco, Hidroaysén, Central Castilla), forestales (Celco, Mehuín) y agroindustriales (Freirina; transgénicos y uso de pesticidas). Las

población no-indígena. Por otro lado, casi el 70% de la población indígena vive en zonas urbanas (Casen, 2009), cifra que hace 15 años no superaba el 50%, evidenciándose un desplazamiento migratorio significativo del campo a la ciudad. Dicho proceso deriva, en un primer momento, en una pérdida de las tradiciones y de los ritos de actualización de la cultura originaria, sin embargo, con el correr del tiempo han surgido agrupaciones urbanas de rescate y fomento de la cultura mapuche que han complementado la acción de las comunidades localizadas en la región de la Araucanía.

Persistentemente, el Estado ha tendido hacia un proceso de aculturación del pueblo mapuche, fomentando el idioma castellano y la adopción de los patrones culturales chilenos (Bengoa, 1996). De acuerdo a la Encuesta CASEN (2009), el 77,6% de la población indígena no habla ni entiende su lengua.

Las reformas liberales del siglo XIX rompieron la economía comunitaria y significaron una pérdida progresiva de tierras al introducir la noción de propiedad privada (Figueroa, 2012). Dicho fenómeno se ha agudizado en los últimos 40 años, tras la contrarreforma agraria impulsada durante la dictadura militar y el creciente volumen de capital derivado de la industria forestal (Zibeche, 2007).

⁶ Entre las propuestas del Ejecutivo destacan el *Acuerdo de Nueva Imperial* (1989), la *Ley Indígena* (1993), los *Diálogos Comunes* (1999), la *Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato* (2003) y *Reconocer: Pacto Social por la Multiculturalidad* (2008). Pese a dichos intentos, en la práctica no se ha podido responder a temas esenciales para el pueblo mapuche, tales como su reconocimiento constitucional, la concreción efectiva del ratificado convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la demanda histórica de las tierras ancestrales

⁷ Como contrapunto a la acción confrontacional, algunas comunidades mapuche han apostado por la vía legal como parte de una estrategia de control de recursos territoriales, obteniendo la sanción jurídica de un derecho territorial colectivo, como es el caso del borde costero marino reclamado por la comunidad lafkenche aglutinada bajo la agrupación Identidad Territorial Lafkenche (Delamaza y Flores, 2012).

comunidades se han volcado en defensa de sus espacios locales, que se ven seriamente afectados por la intervención de empresas privadas.

Un conflicto ambiental se suele definir como una situación surgida a partir de un impacto ambiental producido por una determinada acción, en torno a la cual se enfrentan básicamente tres tipos de actores (Sabatini, 1994): empresas que usan recursos ambientales y generan un impacto ambiental; la comunidad (o grupos de ésta) organizada en torno a la defensa de sus intereses en relación con dicho impacto; y agencias públicas con responsabilidades de mediación en el conflicto⁸.

En los últimos años, una de las acciones de resistencia ambiental que más notoriedad ha tenido, ha sido la protagonizada por la organización Patagonia Sin Represas, en respuesta al proyecto Hidroaysén⁹.

Lo cierto es que las movilizaciones han ido ganando terreno, especialmente tras la presencia de diversas iniciativas de transformación del entorno natural, que redundan generalmente en altos beneficios para las empresas y serios perjuicios para las comunidades. Diversos estudios sobre los conflictos ambientales surgidos en Chile en las últimas décadas, concluyen, en general, que “el modelo económico neoliberal ha acentuado la presión sobre los recursos naturales y desencadenado procesos de degradación ambiental severos; que las comunidades que se han visto afectadas han tomado conciencia de los perjuicios que estos daños ambientales acarrearán y que; en consecuencia, estas colectividades se están organizando y movilizándose cada vez más para defender el medio ambiente” (Folchi, 2001: 79-80)¹⁰.

d) Conflicto social y clivajes

Recordando la apuesta teórica planteada en los '60 por Lipset y Rokkan, Aguilar (2011) retoma la noción de divisorias estructurales –clivajes– y añade algunas otras para entender los movimientos sociales¹¹. Lipset y Rokkan (1967) sostenían que los clivajes se caracterizan por el hecho de que una parte sustantiva del conflicto social gira a su alrededor por largos períodos de tiempo, pudiendo de este modo, explicar la emergencia y estabilización de los partidos

⁸ Las acciones colectivas ciudadanas que surgen en torno a estos conflictos pueden enmarcarse en el denominado “ecologismo popular” (Martínez Alier, 1994), ligado a una percepción y experiencia concreta por parte de las personas, de los perjuicios asociados a las acciones en el medioambiente, tales como contaminación, pérdida o encarecimiento de agua, aire, espacio, energía, etc.; o bien en el ecologismo valórico o ideológico (“ecologismo de los ricos”), relacionado con el reconocimiento de un valor intrínseco a la naturaleza y, por lo tanto, su defensa abstracta, que suele tender hacia un discurso conservacionista y privatizador de la naturaleza (Ávila y Luna, 2013).

⁹ El Proyecto Hidroaysén contempla la construcción de embalses y represas en los ríos más caudalosos de Chile, inundando una superficie de 6.000 ha y proyectando el tendido de una vía de transmisión sobre torres de alta tensión a lo largo de 3.000 kms. de bosques nativos y zonas de interés turístico y ambiental del territorio nacional.

¹⁰ El autor de la cita, sin embargo, discute en su artículo dicha conclusión. En nuestra opinión, pese a su argumento, sigue teniendo fuerza y la evidencia cada vez demuestra con mayor contundencia la incomparable relevancia que han tenido los procesos de liberalización económica y profundización del modelo extractivista-exportador en el deterioro de los ecosistemas y en la pérdida de bienestar de las poblaciones. Ver Padilla y San Martín (1994); Sabatini (1994); Claude (1997); y Padilla (2000).

¹¹ Aguilar (2011) ensaya una interesante aportación para el estudio del conflicto social en relación con los movimientos sociales. En la senda de Kriesi (1998), toma la teoría de los clivajes de Lipset y Rokkan y lo aplica, no ya a los partidos políticos –que dicho sea de paso, en su deriva contemporánea de *catch-all* o *cartel*, son cada vez menos analizables a la luz de ese enfoque–, sino que a los movimientos sociales, comprendiéndolos a partir de las fracturas sociales asociadas a los acontecimientos de protesta.

políticos modernos de Europa Occidental alrededor de dichas fracturas sociales¹². Los clivajes delimitan la fuente probable de protestas sociales y movilizaciones, siendo útil para entender los orígenes y la especialización de los movimientos sociales en las sociedades modernas capitalistas democráticas, combinando las presiones estructurales con la contingencia histórica.

En el caso de los movimientos objeto de análisis, parece sugerente una primera aproximación considerando como clivaje común a los tres movimientos –estudiantil, mapuche y ambiental– el *clivaje transicional*¹³. Los tres apuntan en menor o mayor grado hacia una crítica a la democracia pactada tras la dictadura militar y a la necesidad de una consolidación democrática que permita la realización de reformas sustantivas en el diseño constitucional del país, ya sea reconociendo el carácter plurinacional del país (nación mapuche), refundando el modelo educativo (fortalecimiento de la educación pública y prohibición del lucro) y construyendo un nuevo modelo de desarrollo (rechazo del modelo extractivista, depredador de los recursos naturales).

Junto con aquél, también es pertinente el *clivaje original*, en tanto en una medida muy significativa, los problemas e injusticias a las que aluden los tres movimientos tiene su origen en la “revolución capitalista” (Moulian, 1997) llevada a cabo por la dictadura militar a partir del golpe de estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular¹⁴. En el caso del proceso de desposesión del pueblo mapuche, si bien desde el último cuarto del siglo XIX el Estado chileno comenzó a expropiar sus tierras ancestrales, es bajo la dictadura que ello se agudiza en beneficio del gran capital asociado a la industria forestal¹⁵; en el caso de la mercantilización de la educación, son las reformas impulsadas por Pinochet desde 1981 en adelante las que explican el diseño y características actuales del sistema educativo; por último, en el caso de la depredación y contaminación ambiental, es el modelo extractivista asentado en el mismo

¹² Ello no ocurre de forma mecánica, sino que requiere de al menos dos elementos, tal como apunta Kriesi (1998): los grupos implicados deben ser conscientes de su identidad colectiva y estar dispuestos a actuar sobre esa base y, además, debe expresarse en términos organizativos, es decir, articularse políticamente en el marco de una comunidad humana dividida por alguna fuente estructural de conflicto.

¹³ A semejanza del proceso de transición español, la transición chilena consistió en un pacto entre las élites políticas civiles y militares, que puso en el centro la estabilidad y la gobernabilidad, estableciendo con ello una continuidad en relación a diversos aspectos con el período previo, resultando en sistemas políticos con anomalías estructurales que abren divisorias de confrontación peculiares (Aguilar, 2011).

¹⁴ Bajo la dictadura militar tuvo lugar la aplicación, por primera vez y en una extensión única, de políticas neoliberales que fueron primero ensayadas al alero de un período de terror de Estado (1973-1979) con torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias de los contrarios al régimen; luego institucionalizadas en el período constitucional (1980-1989); y finalmente perfeccionadas bajo la democracia que le sucedió (1990-a la fecha). Un interesante análisis respecto de la implantación del neoliberalismo se puede encontrar en Klein (2007).

¹⁵ Los datos indican que para fines de 1974 –poco después del golpe militar– la masa de plantaciones existentes en Chile era de 450 mil hectáreas (ha). En 1994, cubría ya un área de 1.747.533 ha, el 78,8% de las cuales correspondía a pino radiata y el 13,6% a eucalipto (Montalba y Carrasco, 2005). Para 2009, el área cultivada llegaba a 2,1 millones de ha (Gómez Leyton, 2010: 398). En 2010, el sector forestal fue el segundo sector exportador (sólo abajo del cobre) y el primero basado en un recurso natural renovable, con casi 2,3 millones de hectáreas (Pineda, 2012: 137). Dichas plantaciones se concentran en las regiones del Bio-Bio y la Araucanía (INE, 2007), principales territorios habitados ancestralmente por el pueblo mapuche. De acuerdo a Harvey (2004), la actual etapa de expansión del capital puede caracterizarse como de “acumulación por desposesión” (la acumulación originaria de Marx), que implica la mercantilización y la depredación creciente de, entre otros, los bienes ambientales, desplazando en centralidad a la “reproducción ampliada del capital”. Ello, en un contexto en el que el capitalismo global lleva hasta el límite las tradicionales formas de superar sus crisis: la deuda pública, la explotación de las regiones periféricas y la depredación del medioambiente.

período el que explica el deterioro medioambiental contestado por el movimiento ambientalista.

Finalmente, el *clivaje colonial* permite abordar el caso del movimiento mapuche, atravesado por su especificidad indígena y la dinámica de discriminación y explotación asociada a ella. De acuerdo a Escobar (1998), Mignolo (2001) y Quijano (2007), las herencias coloniales de América Latina cobran cuerpo hasta el día de hoy fundamentalmente en tres ámbitos complementarios: a) el racismo (la colonialidad del poder), que establece una clasificación jerárquica donde en la cúspide siempre está el blanco, seguido del indio y finalmente del negro, la cual se aplica a la división social del trabajo y al ámbito cultural en sentido amplio; b) el eurocentrismo epistémico (la colonialidad del saber), dado el proceso que establece la racionalidad tecno-científica como único modelo válido de producción de conocimiento, anulando otras “epistemes” tradicionales o ancestrales generadas por las culturas originarias; y c) la occidentalización -violenta o consentida- de los estilos de vida (colonialidad del ser), bajo la premisa de la superioridad de los modos de vida occidentales, de la mano de los procesos de modernización y despliegue del capitalismo global. Todos ellos se aprecian con menor o mayor intensidad en la tensa relación existente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

3. La protesta social: definiciones conceptuales y metodológicas

La protesta constituye un acto político, inserto en una dinámica de enfrentamiento entre actores sociales con poder asimétrico. Colectivos imposibilitados de ejercer influencia en las decisiones de las autoridades políticas a través de las vías formales (votos, dinero o fuerza física legitimada institucionalmente), crean y validan su poder mediante la protesta social, a objeto de lograr transformaciones sociales de diverso alcance y profundidad, en distintos planos y con diferentes temporalidades.

La protesta social puede ser definida como “la acción colectiva pública de actores no estatales a favor de un interés común excluido del proceso de toma de decisiones” (Jiménez, 2005: 18)¹⁶, y el *evento de protesta*, como aquel que es deliberadamente elegido, organizado y puesto en marcha de manera estratégica, con el propósito expreso de realizar una demanda política en el ámbito de dicho interés común. De especial interés es esta definición, por cuanto pone el centro en el carácter de las demandas, excluidas del círculo institucional-formal de la política, pero no por ello, menos políticas ni menos integrantes de pleno derecho del juego democrático. Precisamente el objetivo principal de la protesta –ciertamente no el único¹⁷- es

¹⁶ Jiménez, con esta definición, sintoniza con las definiciones propuestas por Tilly (1978) y por Rucht (1998), recogiendo las ideas de “interés común” del primero, y de “actores no estatales” del segundo.

¹⁷ Las expresiones de acción colectiva, especialmente los eventos de protesta, tienen impactos cognitivos (son una arena de debate); afectivos (se desarrollan sentimientos de solidaridad); y relacionales (se configuran redes de protesta) sobre los movimientos (della Porta, 2011). Incluso se ha llegado a sostener que los movimientos poseen una *economía libidinal*, pues “*virtualmente, todos los placeres que los humanos obtienen de la vida social se encuentran en los movimientos de protesta: un sentido de comunidad e identidad; compañerismo y lazos sociales; la*

incidir sobre los actores con poder para la inclusión de los intereses de los manifestantes en el proceso de toma de decisiones.

El poder de los movimientos sociales radica en su capacidad de movilización (Mees, 1998) y su eficacia muchas veces está relacionada directamente con su potencial para producir actos disruptivos (Tarrow, 1994; McAdam, 1999)¹⁸. Al buscar visibilidad pública, representan el símbolo más evidente de la existencia de un conflicto social (Cruz, 2008), que es uno de los aspectos que puede estudiarse a partir del surgimiento de los movimientos sociales; junto con proponer una o varias alternativas de solución al problema público vinculado con dicho conflicto, pues su análisis permite aproximarse a cómo los individuos, grupos, organizaciones e instituciones intentan definir, regular o resolver un determinado problema (Cefaï, 2011).

La contienda política es un fenómeno que debe analizarse en su alcance y características, así como en su evolución en el tiempo, de modo de comprender mejor el tenor de las relaciones entre la ciudadanía, los movimientos sociales y el Estado, sentando las bases para un posterior análisis de la incidencia que aquéllos tienen sobre el sistema político, sobre las políticas públicas o, incluso, sobre la propia conciencia política de los manifestantes.

En el presente trabajo, se utilizan dos unidades de medición de la protesta social, una destinada a dimensionar su presencia y alcance en el tiempo y la otra a caracterizarla en su forma, localización, e intensidad.

La primera corresponde al *número de días en los que se producen actos de protesta*, registrados por una selección de medios de comunicación, tanto convencionales como “ciudadanos”, recogidos en la Cronología del Conflicto Social elaborada por OSAL-CLACSO en sus reportes mensuales o trimestrales en el período 2006-2011. La unidad “día” permite contar con un buen indicador de la actividad contestataria y de su presencia temporal, pareciéndonos el criterio más fiable y más depurado¹⁹. Con esta unidad de medición se reduce considerablemente la posibilidad de omisión, pues es improbable que un hecho de protesta ocurrido en un determinado día no sea registrado por al menos uno de los periódicos o fuentes informativas referenciadas.

La segunda unidad de medición corresponde a las expresiones concretas de acción contestataria o *actos de protesta* que registran los medios en los días señalados. Por ejemplo, una movilización por las calles se desarrolla como una típica “marcha o manifestación”, sin embargo, en algún punto un grupo de manifestantes corta el tráfico configurando una “barricada”, mientras otro grupo logra llegar hasta el edificio de la autoridad para hacer

variedad y el desafío de la conversación, la cooperación y la competición” (Jasper, 1997, citado en della Porta y Diani, 2011: 35).

¹⁸ Incluso, en esta línea, los análisis empíricos señalan que aquellos movimientos que usan la violencia, tienden a tener más éxito que los que no lo hacen (Gamson, 1990; McAdam, 1999), aunque corren el riesgo cierto de perder adhesión ciudadana y legitimidad ante la opinión pública.

¹⁹ Pese a considerarse una metodología adecuada, no está exenta de limitaciones, como por ejemplo, la posibilidad de que queden hechos sin registrar por los medios; la invisibilidad de acontecimientos en desarrollo que sólo son registrados en tanto representen un hito (muestra de esto es que se consigne sólo el inicio y el fin de la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile, ocupada durante 195 días -entre el 9 de junio y el 21 de diciembre de 2011); y la variación de fuentes en las que se basan las Cronologías del conflicto social de OSAL-CLACSO (en el Anexo se presenta una descripción detallada de las fuentes informativas durante todo el período).

“entrega de una carta”. En este caso, tenemos tres expresiones o tipos de acción desplegados en un mismo día de protesta, asociados a unas mismas demandas en torno a un determinado eje de conflicto²⁰.

4. Naturaleza y alcance de la protesta social en Chile (2006-2011)

Considerando las expresiones de protesta social enmarcadas en los procesos reivindicativos o de denuncia y demanda de los movimientos estudiantil, mapuche y ambiental²¹, se observa que en los últimos seis años, en promedio en 102 de los 365 días que conforman cada año, se han desplegado acciones de protesta con resonancia mediática (han sido registradas por algún medio de comunicación). Su presencia ha sido especialmente fuerte en los años 2011 (176 días con eventos de protesta), 2008 (107 días) y 2006 (106 días)²².

Revisando dichas acciones de protesta según el eje de conflicto en torno al cual se producen, tenemos, por un lado, que de los tres, el con menor presencia en todo el período es el ambiental, con un promedio de 20 días de protesta al año, registrando un crecimiento explosivo el año 2011 (alcanza 44 días). Por su parte, el más regular y a la vez, el más denso en cuanto a conflictividad es el mapuche, con un promedio de 54 días de protesta al año en todo el período y un pico significativo el año 2006 (70 días). Finalmente, el estudiantil registra un promedio de 44 días de protesta al año, con un pico muy significativo el año 2011 (124 días), que lo distingue en actividad tanto de los otros ejes de conflicto como de su misma trayectoria, que antes sólo había alcanzado un cénit en el año 2008 con 49 días de acción contestataria – siempre por debajo del mapuche.

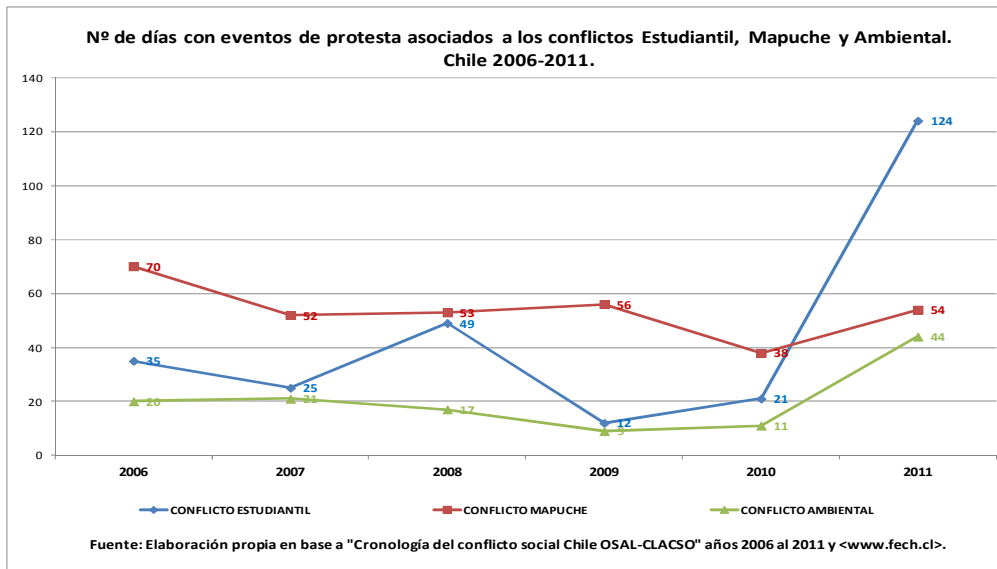
Analizando el comportamiento mensual de la protesta social, se identifican nítidamente períodos de mayor efervescencia, destacando el ciclo entre junio y agosto de 2011 (la causa estudiantil generó acciones durante 22 días en el mes de agosto) y el ciclo entre abril y junio de 2006 (la causa mapuche generó acciones durante 18 días en el mes de mayo). En el medio, año tras año los picos de movilización social se repiten en los meses de mayo-junio y agosto-septiembre. De modo general, el comienzo en marzo del curso escolar ayuda a explicar que en el caso de los estudiantes, sus acciones vayan desarrollándose a poco andar del período lectivo. Junto con ello, existen hitos generales y particulares a cada movimiento que impulsan el surgimiento de eventos de protesta. Por otra parte, la aprobación de proyectos con alto impacto ambiental genera la reacción ciudadana, así como los fallos judiciales en la Araucanía y la respectiva respuesta de los comuneros mapuche –usualmente la realización de largas huelgas de hambre- propician la movilización de sus adherentes.

²⁰ Para una revisión del enfoque de *análisis de eventos de protesta*, ver Rucht *et al* (eds.) (1998) y Koopmans y Rucht (2002).

²¹ Se incluyen en este análisis todas las acciones de protesta protagonizadas por estudiantes –escolares o universitarios- asociadas a problemáticas educacionales; las acciones de protesta protagonizadas por comuneros mapuche o simpatizantes a su causa asociadas a la problemática indígena; y aquellas asociadas a problemáticas medioambientales, ya sea tengan carácter general (por ejemplo, transgénicos) o específico (impactos de grandes proyectos o bien demandas locales relativas a una mejor calidad de vida en términos ambientales).

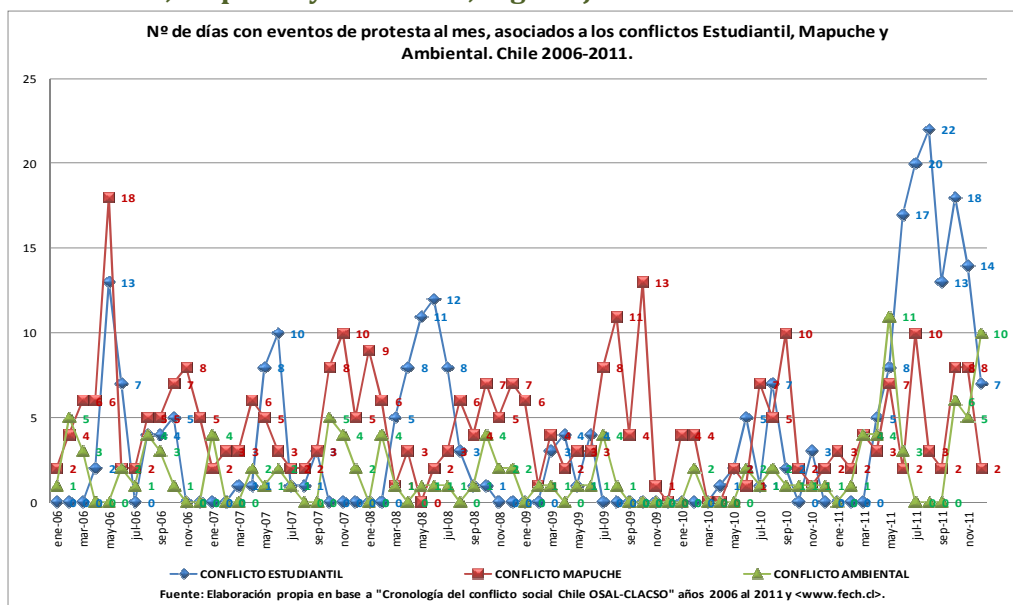
²² Como se detalla más adelante, durante los seis años analizados, en los 611 días en los que han ocurrido acciones contenciosas enmarcadas en los tres movimientos estudiados, se han identificado 1.093 acciones de protesta.

Gráfico 1: Número de días con eventos de protesta asociados a los conflictos estudiantil, mapuche y ambiental, según eje de conflicto. Chile 2006-2011.



Si en cuanto a presencia en el tiempo, destaca la permanencia y recurrencia de la acción colectiva, también es de interés la localización geográfica que ésta tiene, distinguiendo de modo grueso entre los eventos de protesta realizados en un mismo día y en torno a una misma temática, según ocurran sólo en Santiago (la capital), sólo en una o más regiones del país, o bien tanto en Santiago como en regiones (solamente en este último caso, hablamos propiamente de una protesta nacional, aunque muchas de las que se realicen en la capital suelen ser comprendidas en esa dimensión).

Gráfico 2 Número de días con eventos de protesta al mes asociados a los conflictos estudiantil, mapuche y ambiental, según eje de conflicto. Chile 2006-2011.

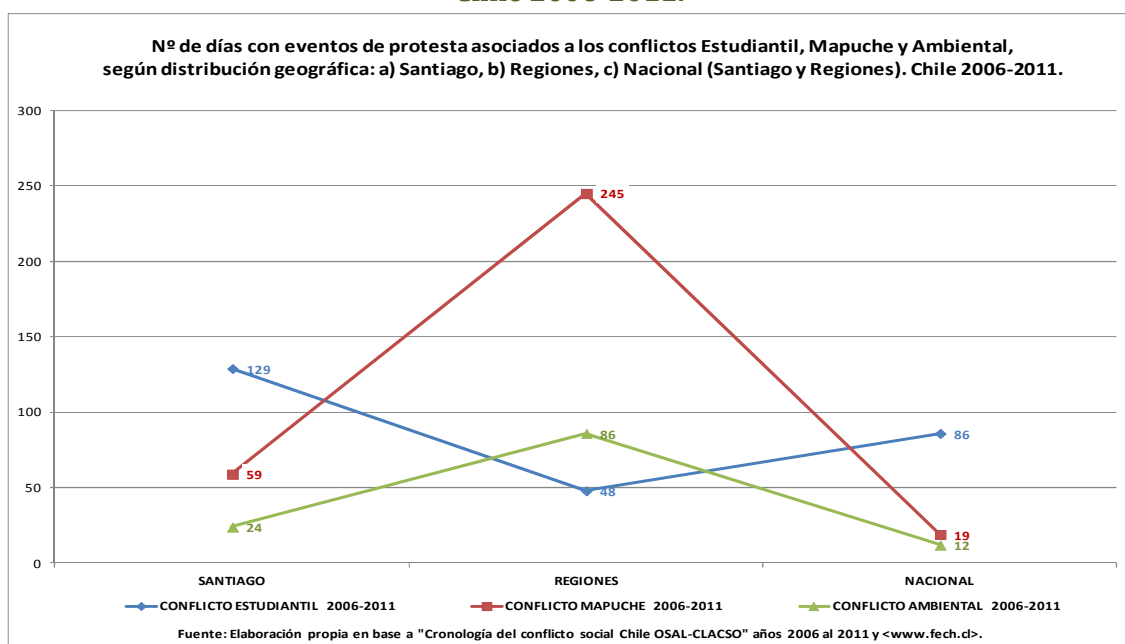


De modo notorio, las regiones llevan la delantera, con eventos de protesta a lo largo de 379 días en los seis años analizados. Santiago, por su parte, concentra la protesta en no

despreciables 212 días, mientras que la protesta propiamente nacional, con expresión tanto en la capital como en una o más regiones –generalmente de modo concurrente en otras ocho ciudades principales del país: Antofagasta, Copiapó, Coquimbo-La Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt- llega a los 117 días en el período.

Según eje de conflicto, la causa mapuche es la que adquiere protagonismo en regiones, específicamente en la región de La Araucanía, escenario por antonomasia de su movilización social, sin perjuicio de una importante presencia en Santiago y una menor convocatoria a nivel nacional. Por su parte, la causa estudiantil es la que mayor presencia tiene en la capital, aunque con una importante presencia a nivel nacional y una menor, pero significativa, ocurrencia exclusiva en regiones. Por último, la causa ambiental tiene mayor presencia en regiones, específicamente en aquellas en las que se localizan los proyectos de alto impacto que se rechazan (Hidroaysén en la región de Aysén, Castilla en la región de Atacama, etc.), una menor ocurrencia en la capital y un registro aún menor a nivel nacional.

Gráfico 3: Número de días con eventos de protesta asociados a los conflictos estudiantil, mapuche y ambiental, según distribución geográfica y eje de conflicto. Chile 2006-2011.



5. Características y repertorio de la protesta social en Chile (2006-2011)

El concepto de repertorio alude a las formas de actuar colectivamente que despliegan los grupos y movimientos en situación de protesta, conectando a conjuntos de individuos en un contexto de enfrentamiento y contienda política. Las formas de acción están determinadas por la tradición y la memoria histórica (Tilly, 2002), aunque dejan un espacio para el aprendizaje y la innovación (Zald, 1999). Además de la experiencia previa que tengan los colectivos, los repertorios dependerán también de los recursos materiales, organizativos y conceptuales de

los movimientos (Traugott, 2002), así como del stock cultural que posean sus participantes²³. No todos los movimientos tienen igual acceso al stock cultural de un momento histórico, por cuanto sus líderes y participantes ocupan posiciones diferenciadas en la estructura social. Por ello, los repertorios deben estar a su disposición y al mismo tiempo ser compatibles con las capacidades, orientaciones y estilos de los grupos que componen el movimiento (Zald, 1999).

Las expresiones colectivas aludidas son formas de resistencia que suponen racionalidad, y contribuyen a crear una conciencia oposicional y una identidad colectiva (Taylor y Van Dyke, 2004). Por ello, la elección de determinadas acciones de protesta por parte de las personas, se manifiesta como muestra de una conciencia política en base a la cual los individuos optan por actuar colectivamente, en lugar de resistir individualmente, resignarse, o huir ante la injusticia. Su sentido radica en la cultura política de la población y en los símbolos de poder que ésta posee (Cruz, 2008), siendo su análisis un importante insumo para la comprensión de la relación entre los colectivos sociales y el sistema político.

Tomando los aportes de Kriesi *et al* (1995), Jiménez (2005) y Tejerina (2010) en relación a la tipología del repertorio de la protesta social, hemos construido un esquema clasificatorio que permite agrupar a las distintas acciones de protesta desplegadas en torno a los ejes de conflicto. La presente propuesta distingue entre acciones de tipo *institucional* y de tipo *no-institucional*, abandonando, por un lado, la clasificación de "convencional" o "no convencional" planteada por Kriesi *et al* (1995), por considerar que todas las acciones de protesta son convencionales, en tanto forman parte de la contienda política en las democracias contemporáneas, y que en el último tiempo se han expandido y normalizado en el proceso político²⁴; y por otro, subsumiendo la categoría de "político" planteada por Jiménez (2005), por considerar que todos los tipos de protesta social forman parte del juego político y son esencialmente políticos. La presente distinción entiende básicamente a las acciones de tipo institucional como aquellas que se insertan en los canales formales ofrecidos por el sistema político y que se adecúan a los procedimientos y plazos por él establecidos, mientras que a las acciones no-institucionales las entiende como aquellas que presionan al sistema desde fuera de los canales formales, con un fuerte componente social. En esta categoría se identifican cuatro sub-tipos: a) Denuncia; b) Cultural; Confrontación; y d) Violencia.

²³ Una referencia clásica sobre la protesta social y los repertorios de acción en Europa y Norteamérica es el libro compilado por Traugott (2002).

²⁴ En cada repertorio operan diversas lógicas de acción, así es como en uno puede importar la lógica de los números (se busca mostrar la fuerza de apoyo a un movimiento), en otro la lógica del daño material (se busca dar cuenta de la capacidad para romper la rutina diaria y el orden público), y en otro la lógica del testimonio (se busca demostrar el compromiso emocional de los activistas). De acuerdo a della Porta y Diani (2011), en las democracias occidentales, las tendencias más estables en torno a los ciclos de protesta son una ampliación del repertorio de la protesta y, simultáneamente, un rechazo creciente a la violencia política.

Tabla 1: Tipología de acciones de protesta

TIPO	ACCIONES DE PROTESTA
NO-INSTITUCIONAL DENUNCIA	Manifestaciones, marchas, concentraciones
	Paro Nacional, paralización de actividades, huelgas
	Huelgas de hambre
	Protestas focalizadas, interrupción de actos
	Cacerolazos
	Encadenamientos
	Velatón
NO-INSTITUCIONAL CULTURAL	Performances, flahsmobs
	Rogativas y rituales
NO-INSTITUCIONAL CONFRONTACIÓN	Ocupaciones o tomas, encierros
	Barricadas, enfrentamientos no-armados con la policía u otros, saqueos
NO-INSTITUCIONAL VIOLENCIA	Daños a la propiedad: destrucción o deterioro intencional de recintos inmuebles o bienes muebles.
	Daños a las personas: ataques armados con resultado de heridos o muertos; auto-inflingirse heridas.
INSTITUCIONAL	Mociones o propuestas al Parlamento
	Recogida de firmas o entrega de carta a autoridades
	Referéndum y/o Plebiscito
	Acciones legales (denuncias, querellas, recursos, etc.)

Distinguiendo *grosso modo* las expresiones de acción colectiva entre aquellas definidas como “institucionales” y las conceptualizadas como “no-institucionales”, tenemos que en el período analizado son estas últimas las que cobran una importancia absoluta como vía de expresión colectiva y mecanismo de acción ciudadana para la interpelación a las autoridades y al sistema político.

Del total de acciones de protesta registradas entre 2006 y 2011, ascendiente a 1.093 acciones, el 96% se inscribe en el marco denominado no-institucional. De ello puede hacerse dos lecturas, la primera relacionada con el alto distanciamiento que existe entre la ciudadanía y el sistema político, asociado éste a los partidos políticos y las instituciones de gobierno, los cuales concitan una creciente percepción de falta de representatividad y generan desconfianza en la población²⁵. La segunda lectura, de la mano con la anterior, es que la estructura del sistema político simplemente no es permeable a las necesidades, intereses y demandas ciudadanas, no existiendo más alternativa que la interpelación directa a través de la protesta para lograr la atención y eventual apertura política ante determinados temas²⁶.

²⁵ Por un lado, se ha registrado una notable reducción y envejecimiento del padrón electoral entre 1988 y 2009 – con sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio–: el porcentaje de votos válidos respecto del total de la población en edad de votar pasó del 89,1% en 1988 al 56,7% en 2009 (Contreras y Navia, 2011), mientras que el año 2012, con ocasión de las primeras elecciones con el nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario, la participación electoral alcanzó un escaso 40% (Servel, 2012). Junto con ello, se ha registrado una creciente pérdida de confianza en las instituciones, principalmente las políticas. En los últimos cuatro años (2009-2012) la confianza - quienes afirman confiar “mucho” + “bastante” - ha experimentado una caída generalizada: la confianza en el Gobierno ha descendido del 38,4% al 17,7%; en los Tribunales de Justicia del 20,7% al 12%; en el Congreso Nacional del 14,8% al 7,8%; y, como corolario, en los Partidos Políticos del 8% al 4,4% (UDP, 2012).

²⁶ Los movimientos sociales y sus acciones de protesta han dejado de representar algo excepcional, para constituirse en algo recurrente y cotidiano en el marco de la política democrática (Meyer y Tarrow, 1998; Palomino *et al*, 2006; Dodson, 2011), destinado a promover una cultura política participativa y a ampliar las oportunidades políticas de la población marginada de la toma de decisiones (Tarrow, 2004). De acuerdo a Dodson (2011), la movilización social se produce cada vez en un mayor número de países democráticos y cada vez participan más

Lo cierto es que en los tres casos analizados, la práctica contestataria por excelencia corre por un carril situado al margen de la institucionalidad, demandante con ella, pero a la vez, escéptica ante sus mecanismos y procedimientos.

Dentro de este tipo de acciones, las que tienen mayor presencia son las de *denuncia* (519 acciones en el período) y las de *confrontación* (372 acciones), siendo las preferidas por los tres movimientos.

La calle es el espacio tradicional en el que el rechazo a una determinada situación o la demanda por cambios dirigida a las autoridades, se expresan en plenitud²⁷. Las manifestaciones, marchas y concentraciones se realizaron sostenidamente y en las principales ciudades del país, teniendo un protagonismo indiscutido en el registro mediático. Su centralidad es característica de un período de movilización social, donde la visibilidad en el espacio público es requisito esencial para fortalecer al colectivo que protesta, tanto en su dinámica de construcción interna (discurso, identidad), como en la búsqueda de apoyo social más amplio (adhesión, legitimidad).

A ellas se agregan las tomas, ocupaciones y encierros, que tienen una presencia significativa, situándose en segundo lugar dentro del repertorio, especialmente de estudiantes (el recurso de la toma/ocupación de los centros educativos ha estado presente a lo largo de la trayectoria de los movimientos estudiantiles desde al menos las movilizaciones enmarcadas en el movimiento de Reforma Universitaria de fines de la década de los '60²⁸) y mapuche (la ocupación de predios agrícolas y fundos ha formado parte de su estrategia de recuperación de tierras ancestrales desplegada en los últimos 15 años).

En el caso del movimiento estudiantil, ya a mitad del año 2011 se hablaba de 466 liceos y 22 universidades “en toma”, ya sea sólo por unas horas o por meses (la casa central de la U. de Chile estuvo 195 días ocupada por los estudiantes). Los estudiantes ocupan los centros educativos (escuelas, liceos, colegios y universidades), los cierran paralizando las clases y manteniéndose en su interior día y noche, realizando tanto asambleas donde se debate sobre

personas en ella. Si bien esto se plantea desde el lado “positivo”, bajo la premisa de que la mayor libertad de expresión y manifestación ciudadana es garantía de democracia, también puede verse su contracara: si la protesta social aumenta es porque la “democracia” no está funcionando todo lo bien que debiera, pues no se está respondiendo a las necesidades de la población y ésta no está participando activamente o de manera vinculante en sus instituciones.

²⁷ Los actores involucrados han cambiado en las últimas décadas: en las jornadas de movilización contra la dictadura entre 1983-87, su coordinación era ejercida por colectividades políticas como Izquierda Cristiana y Democracia Cristiana (Garretón, 2011), situación en ello distinto a las movilizaciones del período 2006-2011, en las que los partidos políticos están ausentes. Asimismo, Salazar (2012) señala que las cuatro formas de expresión popular dominantes durante la dictadura y la posterior democracia (protesta nacional pluri-clasista, movilización sectorial para promover cambios en el sector correspondiente, movilización territorial para promover cambios en la distribución regional del ingreso nacional, y la construcción de redes, bandas o mini-montoneras urbanas) han tenido lugar no sólo ya con ausencia de los partidos, sino que también de los sindicatos, que han quedado relegados a un papel menos que secundario.

²⁸ En junio de 1967 los estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso se toman la Escuela de Arquitectura de dicho centro de estudios, y en agosto ocurre lo propio en la Casa Central de la Universidad Católica, en un hecho que pasó a la posteridad gracias al colgamiento de un lienzo en el que se leía “*Chileno: El Mercurio Miente*”, en directa alusión al manejo mediático del principal periódico conservador del país, propiedad de Agustín Edwards, fiel representante de la élite nacional conservadora, y protagonista años más tarde, en la gestación del golpe militar de 1973.

las movilizaciones y sus demandas, como una serie de actividades libres: talleres, jornadas culturales, deportivas u otras. Tras los días de “toma”, variables en cada establecimiento, bien puede producirse el desalojo violento por parte de la policía o el abandono del recinto en forma voluntaria por decisión de la propia asamblea de estudiantes.

En el caso del movimiento mapuche, se ocupan predios, fundos de agricultores o terrenos de empresas forestales, cuya propiedad ancestral se reclama. La mayoría de las veces la ocupación implica enfrentamientos entre la policía y los comuneros que la realizan; incluso en algunos casos entre éstos últimos y los propios agricultores o grupos de agricultores organizados en defensa de los mismos²⁹.

Junto con las ocupaciones y tomas, una acción de gran simbolismo en el marco de la protesta social es el de la barricada, la cual en varios puntos de la capital y de las principales ciudades del país cambiaba el paisaje cotidiano por las humaredas de neumáticos y otros objetos utilizados para cortar las vías. Producidas en el marco de marchas o de manera aislada, cortando el tráfico vehicular en calles y avenidas, las barricadas son montadas fundamentalmente por adolescentes y jóvenes con el rostro cubierto –los “encapuchados”- y el desenlace casi inevitable de ellas es el enfrentamiento con las fuerzas policiales, resultando normalmente un saldo de detenciones y lesionados. En el caso específico de los mapuche, la barricada adquiere una variante, por cuanto el corte de caminos tiene por propósito obstaculizar el tráfico de camiones forestales y vehículos similares, algunos de los cuales suelen ser atacados.

Otro tipo de acción presente en los tres movimientos es el de las protestas focalizadas, desplegadas ante la presencia de una autoridad en algún acto público, el que generalmente es interrumpido por un grupo de manifestantes, quienes aluden a las demandas del movimiento e interpelan directamente a la autoridad presente. Las acciones culminan la mayoría de las veces con el abandono del lugar de manera pacífica, aunque en otras ocasiones son desalojados.

También es común el desarrollo de los “cacerolazos” o “caceroleos”³⁰, acción consistente en salir a la entrada de las viviendas, en los jardines o bien en las terrazas de las residencias en altura, a una hora definida previamente –normalmente al caer la noche-, y hacer sonar las cacerolas con algún objeto, provocando un intenso ruido que, agregado al de los vecinos y demás participantes de la zona, genera un sonoro coro metalizado. En el caso del movimiento estudiantil de 2011, incluso se produjo una convocatoria de caceroleo en una plaza pública (Ñuñoa), lugar de encuentro común de los vecinos, con alta participación y notoriedad.

²⁹ El más conocido de estos grupos es el denominado “Comando Hernán Trizano”, surgido el año 2000 en la Provincia de Malleco, cuyo nombre se debe al militar organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias a fines del siglo XIX, tras la ocupación de la Araucanía por el Estado chileno y los colonos extranjeros. Dicho cuerpo tenía por misión vigilar la seguridad en las provincias de Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue y el cuidado de las reservas forestales.

³⁰ No obstante tener su origen en la protesta conservadora contra la Unidad Popular (1970-1973), su práctica durante la dictadura militar, especialmente entre 1983-1986 hizo que la izquierda y el pueblo en general se la apropiaran como expresión de descontento social.

Menos comunes, pero también presentes, son las velaciones, realizadas en una localización específica, en la que se encienden velas conmemorando una fecha o bien como símbolo de apoyo sentido a una determinada causa; los encadenamientos, en los que individuos o grupos pequeños se encadenan a algún edificio de notoriedad pública (el palacio de gobierno, la catedral de la ciudad, etc.) a objeto de llamar la atención sobre un determinado asunto, interpelando a las autoridades y a la sociedad toda; y finalmente, la convocatoria a Paro Nacional, en la cual el movimiento hace un llamado al conjunto de la nación a dejar sus actividades cotidianas (trabajo, estudios) en apoyo a sus demandas. Acción tradicional del sindicalismo, en el período estudiado fue convocada por los estudiantes en conjunto con los sindicatos³¹.

Una acción de denuncia de gran resonancia por su significación, es la relativa a la huelga de hambre. El poner en riesgo la propia vida dejando voluntariamente de ingerir alimentos y, en algunos casos, incluso líquidos, lleva la protesta a una línea considerada muchas veces como extrema, sin embargo, expresa también la percepción de la injusticia profunda experimentada por los activistas, así como lo sentido de su reclamo. Tanto el movimiento estudiantil como el mapuche han recurrido a esta acción como modo de presión a las autoridades. En el caso del primero, el año 2011, 41 estudiantes realizaron huelga de hambre, llegando a permanecer en dicha situación un máximo de 61 días. En el caso del movimiento mapuche, en los años 2007-2008 una activista permaneció 112 días en huelga de hambre, con serio riesgo vital; posteriormente, en 2011, 4 presos estuvieron un total de 86 días en huelga de hambre, reclamando por las condenas recibidas³².

Un tercer tipo de acción no-institucional es el definido como *violencia*, el cual comenzó a registrar un crecimiento desde el año 2008, para alcanzar su máximo el 2011, de la mano de su fuerte presencia en el eje de conflicto mapuche³³. Si bien su alcance es muy minoritario considerando el global de la acción colectiva desplegada, su presencia permanente habla de un campo de acción reconocido por algunos colectivos como válido e, incluso, como el más directo de hacer frente a “la otra violencia”, aquella ejercida por la policía y, en el nivel cotidiano, por las autoridades y las élites en general³⁴.

³¹ Dado el escaso poder de los sindicatos en el país (la cifra de sindicalización es cercana al 11% de los trabajadores), el Paro adquiere un sentido diferente al de la Huelga General de los países con un sindicalismo sólido, manifestándose más que en ausentismo laboral, en protestas callejeras multitudinarias.

³² La aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista a los comuneros detenidos, ha significado la realización de procesos judiciales sin garantías, con figuras como la de los “testigos sin rostro” o la suficiencia de una simple acusación (sin requerirse pruebas); y la aplicación de penas considerablemente mayores a las de delitos similares en los que se aplica la ley convencional. Ello ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por el movimiento mapuche y por órganos internacionales como Naciones Unidas, y su abandono se ha transformado en la segunda reivindicación del movimiento, sintetizada bajo el lema “Libertad a los presos políticos mapuche”.

³³ La lucha y el enfrentamiento violento pasaron a ser una dimensión central en la estrategia del movimiento mapuche desde 1997 en adelante, asociada a la formación de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), cuyo discurso reivindicativo autonomista y el rescate de la tradición guerrera del pueblo mapuche (el “renacer de los weichafes”), marcaron un hito en el movimiento (Tricot, 2009).

³⁴ La memoria histórica nacional de la protesta ha jugado su papel en ello, en tanto la imagen de la protesta callejera en la que se producen enfrentamientos con la policía (lanzamiento de piedras y, en los casos más radicales, de cócteles molotov por parte de los manifestantes; y la acción de carros lanza-aguas y bombas lacrimógenas por el lado de la policía) forma parte del imaginario colectivo.

El movimiento estudiantil, consciente de la legitimidad y adhesión ciudadana lograda, rechazó las acciones violentas, buscando evitarlas e incluso controlarlas en las movilizaciones, mientras que una parte del movimiento mapuche, por el contrario, las asumió explícitamente como una estrategia legítima en la reivindicación de sus demandas, en tanto contienda esencialmente política (Llaitul y Arrate, 2012)³⁵.

Finalmente, un tipo de acción que ha registrado una creciente importancia, con un crecimiento explosivo el año 2011 es la denominada *cultural* o *lúdica*, referida a la realización de *performances*, *flashmobs* y actividades diversas de carácter recreativo o histórico-memorial en el espacio público, expresión de creatividad e innovación destinadas a concitar apoyo de la población o interpelar a las autoridades. Presentes en los tres movimientos, sin duda fue el estudiantil el que más lo desarrolló durante el 2011, que entre abril y diciembre, marcó 20 días con eventos como “el suicidio masivo por la educación”, “la besatón por la educación”, “la playa itinerante” en el centro de Santiago –en respuesta al adelantamiento de las vacaciones decretada por el Ministerio de Educación–, “el funeral simbólico de la educación pública”, “el *thriller* en la Plaza de la Ciudadanía”, “la maratón por la educación” y la “caminata silenciosa”.

En cuanto a las acciones *institucionales*, las más recurrentes son las relativas a recogida de firmas y a entrega de cartas a las autoridades (32 de estas acciones en el período), distribuidas de modo similar en torno a los tres ejes de conflicto. A ellas les siguen las acciones legales interpuestas en los tribunales de justicia (11 acciones), utilizadas casi exclusivamente en relación al eje de conflicto mapuche –el más judicializado.

Una de las acciones de presión directa institucional más masivas en cuanto a participación, tiene lugar sólo a modo simbólico, pues carece de validez legal. Se trata del “Plebiscito por la Educación”, que concitó la participación de 1.480.000 personas, cuya amplia mayoría (el 90,7%) votó “Sí” a las tres demandas sometidas a juicio: finalizar el lucro, mejorar la educación y desmunicipalizar los liceos.

Al repertorio descrito, se suma una enorme cantidad de acciones constructivas o pedagógicas (conferencias, videos, carteles, panfletos, etc.), que durante todo el período cumplieron la función de sensibilizar e informar a la ciudadanía, a la vez que generar debate entre los movimientos y la sociedad³⁶.

Los repertorios identificados indican una gran diversidad de formas de acción contestatarias. A su modo, cada una cumple con los diferentes objetivos de la protesta, tanto al interior como al exterior del movimiento. Hacia dentro, unas generan compromiso, fortalecen la identidad, otorgan satisfacción y también potencian las expectativas de éxito (por ejemplo, las

³⁵ Cabe notar que las acciones violentas a las que nos referimos son acotadas en su alcance y despliegue, estando en un nivel lejano del planteamiento de la lucha armada como vía de transformación o de la revolución por las armas. En cualquier caso, la literatura indica que la presencia de extremistas en los movimientos induce a brindar apoyo a los moderados, en un intento por minar la influencia ejercida por los radicales (McAdam *et al*, 1999: 38, siguiendo a Barkan, 1979 y a Haines, 1988); esto puede traer ventajas o desventajas, pues, por un lado, se abre la posibilidad a contar con apoyo de alianzas políticas institucionalizadas y así incluir los temas en la agenda, sin embargo, por otro, al entrar en los canales convencionales, las demandas se moderan tanto que surge una brecha entre lo originalmente reclamado por el movimiento y la respuesta política.

³⁶ Dado el volumen y magnitud de ejemplos de este tipo de acciones, no se ha sistematizado su registro.

movilizaciones callejeras masivas); otras, en cambio, sólo contribuyen a los dos primeros aspectos (por ejemplo, las ocupaciones y tomas). Hacia fuera, algunas generan adhesión ciudadana y legitimidad, como medio para la interpelación a las autoridades (por ejemplo, las movilizaciones callejeras pacíficas); otras se dirigen directamente hacia ellas para reivindicar sus derechos y lograr sus objetivos (por ejemplo, protestas focalizadas, ataques directos). Ya sean de uno u otro tipo, permiten acumular experiencias y aprendizajes por parte de los activistas, que recurrirán a ellas según lo vean necesario considerando el estado interno del movimiento y el contexto socio-político.

El grueso del repertorio tiene una sólida tradición histórica arraigada en la memoria colectiva de la sociedad, aún en sus miembros más jóvenes, sin embargo, a ella se añade un conjunto de acciones que resultan totalmente novedosas. Los estudiantes lograron combinar el acervo contestatario de la sociedad con nuevas expresiones teñidas de creatividad y humor. A la perenne marcha callejera y a la histórica barricada, al caceroleo y a la toma de los establecimientos, se sumó la realización de performances artísticas y deportivas que se desplegaban en los espacios públicos, ganando el apoyo y la admiración de la gente.

Por su parte, el movimiento mapuche hizo uso de un repertorio más limitado y con una alta presencia de acciones violentas, junto con la realización de la huelga de hambre como recurso extremo. El uso preferente de ambas estrategias puede relacionarse con la falta de una adhesión ciudadana masiva a la causa –a diferencia de lo ocurrido con las demandas estudiantiles y ecologistas-, que permita demostrar capacidad de presión por esa vía, pues, como en todo movimiento social, el poder del movimiento radica en su capacidad de movilización, en su visibilidad en el espacio público como un colectivo unido y comprometido, y en su habilidad para concitar el apoyo ciudadano a sus demandas³⁷. Siendo difícil especialmente este último punto para la causa mapuche, las estrategias utilizadas han tomado otro camino.

Finalmente, en el caso del movimiento ambientalista, presenta un repertorio más tradicional, centrado en las protestas callejeras y algunas acciones de violencia.

³⁷ Según Tilly y Wood (2010), uno de los tres elementos que dan cuerpo a un movimiento social es la presencia de manifestaciones públicas y concertadas de “WUNC” de los participantes: valor, unidad, número y compromiso. Los otros dos elementos son la realización de campañas y la existencia de un repertorio de acción política.

Gráfico 4: Tipo de acciones desplegadas en los días con eventos de protesta asociados a los conflictos estudiantil, mapuche y ambiental, detalladas las no-institucionales, según eje de conflicto. Chile 2006-2011.

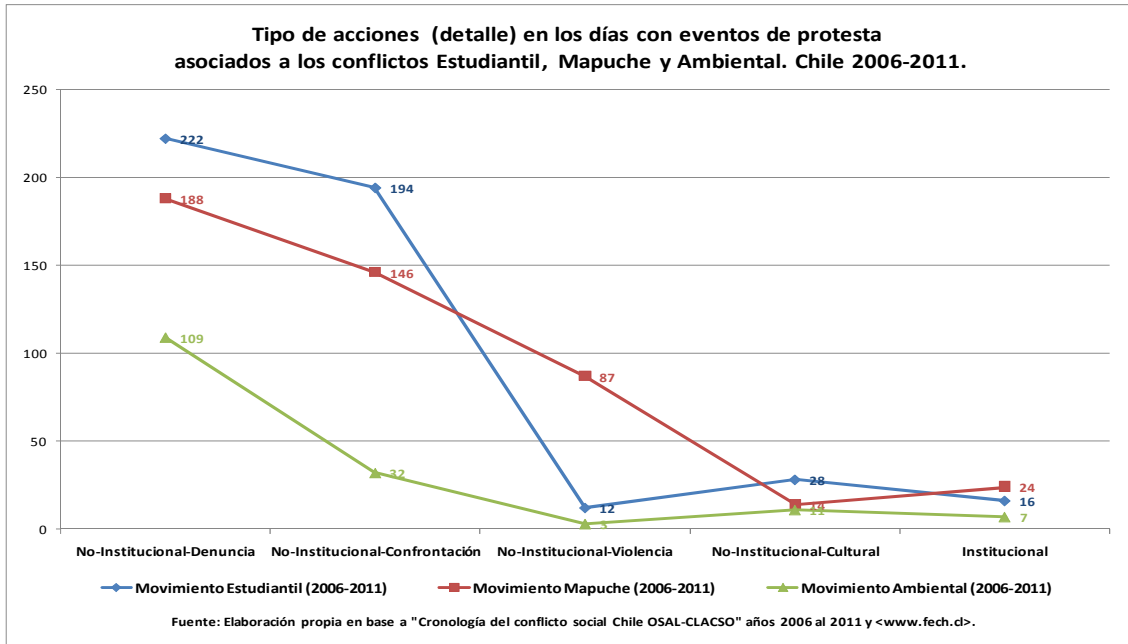
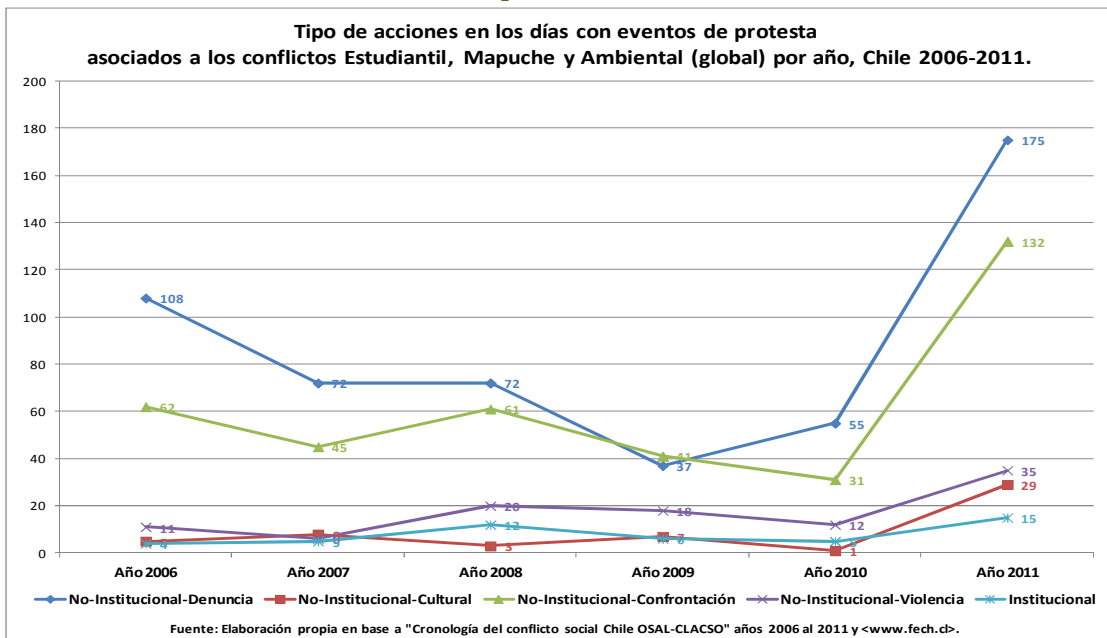


Gráfico N°5: Tipo de acciones desplegadas en los días con eventos de protesta asociados a los conflictos estudiantil, mapuche y ambiental, detalladas las no-institucionales, por año. Chile 2006-2011.




6. Cierre y lineamientos de investigación

Hemos constatado que en el período 2006-2011 la protesta social mostró una importante regularidad, sólo modificada el año 2011 de la mano de las explosivas movilizaciones estudiantiles. Las formas de expresión se han diversificado de manera innovadora, aunque perduran las estrategias actualizadas de la memoria popular de resistencia, las cuales se despliegan por todo el país, especialmente en regiones, de la mano de demandas locales y también nacionales, que suscitan adhesión en distintos territorios.

La movilización social es política, y su principal desafío es lograr incidir en el sistema político y en las estructuras gubernamentales para la concreción de sus demandas. La predominancia de acciones no-institucionales indica que los espacios formales para la incorporación de las demandas, no existen o no son efectivos, o carecen de legitimidad y credibilidad, obligando a canalizar la energía social bajo lógicas contenciosas.

La persistencia en el tiempo, la masividad, elocuencia y radicalidad de las acciones, nos hablan de conflictos con raíces profundas y traumáticos efectos en los colectivos sociales, que se sitúan ante un Estado la mayoría de las veces sordo y clausurado herméticamente, que tiende a reprimir y a ignorar los reclamos ciudadanos.

La democracia está en cuestión, pero la política está resurgiendo. La participación en acciones de protesta revela una conciencia propiamente política, en la que se arriesga la prisión, el maltrato e incluso la vida, y en la que se juegan las esperanzas de muchos por generar las transformaciones deseadas.

A la luz de los resultados obtenidos en el presente trabajo y considerando sus potencialidades, se delinean dos ámbitos de investigación. El primero pone en relación el repertorio de acción desplegado con la naturaleza del eje de conflicto, así como con los discursos generados por los movimientos en torno de ellos. El segundo, relaciona el repertorio de acción con los efectos e impactos políticos de la protesta social, tanto a nivel institucional como de la subjetividad política de los manifestantes. Ambos conforman un programa de investigación en curso tendiente a una mejor comprensión de la protesta social y sus alcances. 

Referencias y fuentes/References

- Aguilar, S. 2011. "La teoría de los clivajes y el conflicto social moderno". En Ibarra, P. y Cortina, M. (comp.) (2011) Recuperando la radicalidad. Un encuentro en torno al análisis político crítico. Barcelona: Editorial Hacer. pp. 209-236.
- Ávila, P. y Luna, E. 2013. "Del ecologismo de los ricos al ecologismo de los pobres". Revista Mexicana de Sociología 75, núm. 1: 63-89. México, D.F.
- Bellei, C. 2009. "The public-private school controversy in Chile". In R. Chakrabarti & P.E. Peterson (Eds.), School choice international: Exploring public-private partnerships (pp. 165-192). Cambridge, MA: The MIT Press.
- Bello, A. 2004. "Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas". Santiago de Chile: CEPAL.
- Bengoa, J. 1996. "La Comunidad Perdida. Ensayos sobre identidad y cultura: los desafíos de la modernización en Chile". Santiago de Chile: Ediciones SUR.
- Bengoa, J. 2000. "Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX". Santiago de Chile: LOM.
- Cefaï, D. 2011. "Diez propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas. De la experiencia al compromiso". Revista de Sociología, Nº 26. pp. 137-166.
- Claude, M. 1997. "Una vez más la miseria ¿Es Chile un país sustentable?". Santiago: LOM.
- Contreras, G. y Navia, P. 2011. "Participación Electoral en Chile, 1988-2010 ¿Quiénes votan, quiénes han dejado de votar y quiénes nunca votaron? Participación Electoral en Chile, 1988-2010". Ponencia presentada en VI Jornadas de Jóvenes Investigadores Instituto de Investigaciones Gino Germani, 10, 11 y 12 de noviembre de 2011.
- Cruz, R. 2008. "Repertorios. La política de enfrentamiento en el siglo XX". Madrid: CIS. Colección Monografías Nº 258.
- Delamaza, G. y Flores, F. 2012. "Incidencia del movimiento indígena en la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios en Chile", en Fernández, M. y Salinas, J. (comps.) (2012) Defensa de los derechos territoriales en Latinoamérica. Santiago: RIL Editores.
- della Porta, D. y Diani, M. 2011. "Los movimientos sociales". Editorial Complutense – CIS, Colección Debate Social, España.
- Dodson, K. 2011. "The Movement Society in Comparative Perspective", en Mobilization. Volume 16, Number 4 / December 2011. Pp.475 – 494.
- Escobar, A. 1998. "La invención del Tercer Mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo". Colombia: Norma.
- Figueroa, V. 2012. "La realidad de los pueblos indígenas en Chile: una aproximación sociodemográfica para contribuir al diseño de políticas públicas pertinentes". Revista Anales Séptima Serie, Nº 3, julio. pp.137-153.
- Foerster, R. 2006. "¿Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y antropológica a los Mapuche de la costa de Arauco, Chile". Tesis para optar al grado de Doctor en Antropología, Universidad de Chile.
- Folchi, M. 2001. "Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas". El ecologismo popular a debate, 22. pp.79-101.

- Fortin, D. y Pairicán, F. 2010. "20 Años de desencuentro. Las demandas del Movimiento Mapuche y una posible solución al conflicto". Santiago: Fundación Konrad Adenauer.
- Gamson, W. 1990[1975]. "The strategy of social protest". Belmont CA: Wadsworth.
- Garretón, M. 2011. "Movilizaciones y movimiento social en la democratización política chilena", en La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador. Madrid: Biblioteca Nueva. Cap.6.
- Garretón, M.; Cruz, M.; Aguirre, F.; Bro, N.; Farías, E.; Ferreti, P. y Ramos, T. 2011. "Movimiento social, nuevas formas de hacer política y enclaves autoritarios. Los debates del Consejo Asesor para la Educación en el gobierno de Michelle Bachelet en Chile". Polis [En línea], 30 | 2012.
- Harvey, D. 2004. "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión". Pantich, Leo y Colin Leys (ed.) El Nuevo desafío Imperial: 99-129. Buenos Aires: Merlin Press - Clacso.
- INE. 2007. Censo Agropecuario.INE.
- INE. 2011. Compendio Estadístico. Santiago de Chile: INE.
- Jiménez Sánchez, M. 2005. "El impacto político de los movimientos sociales. Un estudio de la protesta ambiental en España". CIS-Siglo XXI, Colección Monografías Nº 214, Madrid.
- Klein, N. 2007. "La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre". Barcelona: Paidós Ibérica.
- Kriesi, H. 1995. "The political opportunity structure of New social Movements: Its impacto n their mobilization". En Jenkins, J. y Klandermans, B. (eds) (1995) The politics of social protest. Comparative perspectives on states and social movements. Minneapolis: The University of Minnesota Press. Pp.167-198.
- Kriesi, H. 1998. "The transformation of cleavage politics. The 997 Stein Rokkan lecture". En European Journal of political Research, 33. pp.165-185.
- Lipset, S. y Rokkan, S. 1967. "Cleavage structures, party systems and voter alignments: an introduction". En Lipset, S. y Rokkan, S. (eds.) (1967) Party systems and voter alignments. Nueva York: Free Press. pp. 1-64.
- Llaitul, H. y Arrate, J. 2012. "Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política. Santiago de Chile: Ceibo.
- Martínez Alier, J. 1994. "De la economía ecológica al ecologismo popular, ICARIA (2ªedición), Barcelona.
- Mayol, A. 2011. "2011", Presentación en ENADE, Santiago de Chile.
- McAdam, D. 1999. "[Oportunidades políticas] Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación". En McAdam, D.; McCarthy, J. y Zald, M. (eds.). (1999). Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales. Madrid: Ediciones Istmo. pp.49-70.
- McAdam, D.; McCarthy, J. y Zald, M. (eds.). 1999. "Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales". Madrid: Ediciones Istmo.
- Mees, L. 1998. "¿Vino viejo en odres nuevos? Continuidades y discontinuidades en la historia de los movimientos sociales", en Ibarra, P. y Tejerina, B. (1998). Los Movimientos Sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Editorial Trotta. pp.291-320.

- Melucci, A. 1996. "Challenging Codes. Collective Action in the Information Age". Cambridge: Cambridge University Press.
- Melucci, A. 1998. "La experiencia individual y los temas globales en una sociedad planetaria", en Ibarra, P. y Tejerina, B. (1998). Los Movimientos Sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Editorial Trotta.pp.361-382.
- Meyer, D. y Tarrow, S. 1998. "The social movement society". Lanham: Rowman & Littlefield.
- MIDEPLAN. 2009. "Encuesta CASEN".
- Mignolo, W. (ed.). 2001. "Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate internacional contemporáneo". Buenos Aires: Ediciones del Signo.
- Mizala, A., & Torche, F. 2010. "Bringing the schools back in: The stratification of educational achievement in the Chilean voucher system". International Journal of Educational Development, 53, 132-144. doi:10.1016/j.ijedudev.2010.09.004
- Mönckeberg, O. 2007 "El negocio de las universidades en Chile". Santiago: Random House Mondadori.
- Moulian, T. 1997 "Chile actual. Anatomía de un Mito". Santiago de Chile: LOM.
- OCDE. 2011. "Informe Educación Superior en Chile". OCDE.
- OPECH. 2009a. "De actores secundarios a estudiantes protagonistas". Santiago de Chile.
- OPECH. 2009b. "Juventud y enseñanza media en Chile del Bicentenario. Antecedentes de la revolución pingüina". Santiago de Chile.
- Padilla, C. (ed.) 2000. "El pecado de la participación ciudadana. Conflictos ambientales en Chile". Santiago: Observatorio Latinoamericano de conflictos ambientales.
- Padilla, C. y San Martín, C. 1994. "Conflictos Ambientales. Una oportunidad para la Democracia". Santiago: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
- Pairicán, F. y Álvarez, R. 2011. "La Nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)". Revista www.izquierdas.cl, 10, agosto 2011, pp. 66-84.
- Palomino, H., Di Marco, G., Calderón, F. 2006. "Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina". Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.
- Pineda, C. 2012. "La dimensión socioambiental del movimiento mapuche en Chile" en OSAL Año XIII, N° 32, noviembre. Buenos Aires: CLACSO.
- Quijano, A. 2007. "Colonialidad del poder y clasificación social", en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Rucht et al (eds.) 1998. "Acts of dissent. New developments in the study of protest". Berlin: Sigma.
- Sabatini, F. 1994. "Espirál histórica de conflictos ambientales: el caso de Chile", en Ambiente y Desarrollo, Vol X, N°4, 15-22, diciembre.
- Salazar, G. 2012. "Los movimientos sociales en Chile". Santiago: Uqbar eds.
- Servel. 2012. Ver: <www.servel.cl>

- Tarrow, S. 2004. "El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política". Madrid: Alianza Editorial.
- Taylor, V. and Van Dyke, N. 2004. "'Get up, Stand up': Tactical Repertoires of Social Movements". En Snow, D.; Soule, S. y Kriesi, H. (eds.). (2004). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Blackwell publishing. pp. 262–93.
- Tejerina, B. 2010. "La sociedad imaginada. Movimientos sociales y cambio cultural en España". Madrid: Editorial Trotta.
- Tilly, Ch. 1978. "From Mobilization to Revolution". Nueva York: McGraw-Hill.
- Tilly, Ch. 2002. "Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña, 1758-1834". En Traugott, Mark (compilador). 2002. *Protesta social. Repertorios y ciclos de la acción colectiva*. Barcelona: Hacer. pp.17-48.
- Tilly, Ch. y Wood, L. 2010. "Los movimientos sociales, 1768-2009: Desde sus orígenes a Facebook". Barcelona: Ed. Crítica.
- Traugott, M. 2002. "Protesta social. Repertorios y ciclos de la acción colectiva". Barcelona: Hacer.
- Tricot, T. 2009. "El nuevo movimiento mapuche: hacia la (re) construcción del mundo y país mapuche". Polis [En línea], 24 | 2009, Puesto en línea el 28 abril 2012, consultado el 13 junio 2012. URL : <http://polis.revues.org/1584Pinto, 2000>;
- UDP. 2012. "Encuesta Nacional Chile 2012". ICSO.
- Valenzuela, J. P., Bellei, C., & De los Ríos, D. 2009. "Evolución de la segregación socioeconómica de los estudiantes chilenos y su relación con el financiamiento compartido". Reporte elaborado para el Ministerio de Educación de Chile.
- Waldman, G. 2012. "Historical memory and present-day oblivion: The Mapuche conflict in post-dictatorial Chile". *Time Society*, March 2012, vol. 21, nº 1. pp.55-70.
- Zald, M. 1999. "Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos", en McAdam, D.; McCarthy, J. y Zald, M. (eds.). (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Ediciones Istmo. pp.369-388.
- Zibechi, R. 2007. "Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento". Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales – Programa Democracia y Transformación Global.

Citación recomendada/Recommended citation

Fernández Labbé, Juan (2013): La Protesta Social en Chile (2006-2011): conflicto social y repertorios de acción en torno a los movimientos estudiantil, mapuche y ambiental. GIGAPP Estudios/Working Papers. Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Madrid. No. WP-2013-27. 26 pp.



Grupo de Investigación en
Gobierno, Administración
y Políticas Públicas

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset

Sobre el GIGAPP

El Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) es una iniciativa académica impulsada por un equipo de doctorandos y profesores del Programa de Gobierno y Administración Pública (GAP) del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), Fundación Ortega – Marañón, cuyo principal propósito es contribuir al debate y la generación de nuevos conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas públicas, fomentando la creación de espacio de intercambio y colaboración permanente, y facilitando la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre la base de actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión.

Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son:

1. Gobierno, instituciones y comportamiento político
2. Administración Pública
3. Políticas Públicas

Información de Contacto

Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP)
Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública (GAP)
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), Fundación Ortega – Marañón
C/ Fortuny, 53
28010 Madrid – España
ewp@gigapp.org

ANEXO: Fuentes referidas en la Cronología OSAL-CLACSO

En enero del año 2006, las fuentes consideradas para la elaboración de los reportes son las siguientes: El Mercurio, La Tercera, páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Meli Wixan Mapu (MWM), Hommodolars, Desobediencia Informativa, Indymedia Santiago, Indymedia Valparaíso e Indymedia Chilesur; en mayo de 2006 se resta a La Tercera y en septiembre se resta a Indymedia Chilesur y se añade Minga Informativa de Movimientos Sociales.

En mayo de 2007, sale Minga Informativa y entra Sumariados, que a su vez será sacado en junio; en octubre entra Identidad Lafkenche, sale al mes siguiente y entra Meli Wixan Mapu; en diciembre sale Hommodolars y MWM, entran La Nación, La Tercera, El Siglo, Punto final y Liberación.

En enero de 2008, salen Mapuexpress, Indymedia Santiago y Liberación; En mayo entra Indymedia Santiago, Liberación, Mapuexpress y Radio Cooperativa; en agosto entra Identidad Lafquenche y MWM. En septiembre salen todos los anteriores y entra El Nuevo Día, Primera Hora, Vocero, Agencia EFE, Asocietes Press. Red Betances, Claridad, Bandera Roja, Espacio Insular; en octubre salen los anteriores y entran El Mercurio, La Nación, La Tercera, El Siglo, Indymedia Santiago, Liberación, Punto Final, Mapuexpress, Periódico Mapuche Azkintuwe y Radio Cooperativa; en noviembre sale El Siglo, que entra en diciembre junto con identidad Lafkenche.

En febrero de 2009 entra Observatorio Ciudadano, MWM y Radio Tierra; en marzo salen Azkintuwe, El Siglo y Punto Final, Indymedia santiago, Identidad Lafkenche, Observatorio Ciudadano, MWM y Radio Tierra. En abril entra El Mostrador y vuelven Azkintuwe, El Siglo, Punto Final y Observatorio Ciudadano. El Mostrador y vuelve Azkintuwe, El Siglo, Punto Final y Observatorio Ciudadano; en junio entra OLCA y en julio El Austral; en agosto salen El Austral, El Mostrador, Identidad Lafkenche y Observatorio Ciudadano.

En mayo de 2010, entra El Ciudadano, El Clarin, Fortin Mapocho; en julio sale Fortín Mapocho; en diciembre salen El Clarin, Mapuexpress y Cooperativa.

En enero de 2011 vuelven El Clarín, Mapuexpress y Radio Cooperativa; en mayo entran El Austral de la Araucanía, La Estrella de Concepción, Diario Austral y El Día de La Serena, Fortín Mapocho y Biobiochile; en octubre entran Publimetro, El Dinamo, Soychile, Tele13., Mums, Emol y Ptr; en noviembre entra El Observatorio Ciudadano, que luego sale en diciembre.